

Señor:
JUEZ ADMINISTRATIVO (REPARTO)
Guadalajara de Buga Valle
E.S.D

REF.: ACCION DE REPARACION DIRECTA

Demandante : JHON WILMAR ROSERO GARZON.

Demandados : La nación, Fiscalía General de la Nación, Rama judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Art 159 ley 1437 de 2011)

FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA, mayor de edad, vecino de esta localidad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me ha conferido: JHON WILMAR ROSERO GARZON, MELBA LEONOR TASCON JESUS HERNAN ROSERO CALDAS, MARIA ESNEDA GARZON BETANCOURTH en calidad de víctimas, una directa, las otras indirectas de la Administración de Justicia, personas identificadas en su orden C.C. No. 6.098.744. de Cali (V), CC 38.460.723. de Cali (V), CC No. 6.300.842. de Cali (V), CC 31.300.750. Aclarando que JHON WILMAR ROSERO GARZON actúa en nombre propio y como víctima directa, además en representación de sus menores hijas ANA MARIA ROSERO TASCON, KAREN EDILIA ROSERO CAPOTE Y MARIA CAMILA ROSERO GALLEGO, la señora MELBA LEONOR TASCON en calidad de Compañera permanente de JHON WILMAR ROSERO GARZON, y los señores JESUS HERNAN ROSERO CALDAS Y MARIA ESNEDA GARZON BETANCOURTH actuando como padre y madre de JHON WILMAR ROSERO GARON (Víctima directa de la Administración de justicia) con todo respeto ante su honorable Despacho me permito manifestar que en ejercicio **DE LA REPARACIÓN DIRECTA** consagrado en el Art. 140 del Código Contencioso Administrativo (**LEY 1437 DE 2011**), Demando a la **NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION, RAMA JUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, o sus Delegados ante lo Contencioso Administrativo para que, con citación y audiencia del señor Agente del Ministerio Público, se ordene la **REPARACION DIRECTA**, a cargo de la **NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION, RAMA JUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTARCION JUDICIAL, MINISTERIO DE JUSTICIA** o sus Delegados ante lo Contencioso Administrativo, equivalente a la indemnización integral de los perjuicios causados por hechos u omisiones que deben derivar responsabilidad del Estado, para que en sentencia de merito se pronuncien sobre los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El día 13 de enero de 2016, el señor JHON WILMAR ROSERO GARZON fue privado de su libertad por parte de la policía Nacional en la VÍA MEDIA CANOA La Virginia Km 45 por un aparente delito de PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES.

SEGUNDO : el mencionado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y luego presentado ante el Juez Promiscuo Municipal de Trujillo (V), quien el 14 de enero del año 2016, quien ante petición de la Fiscalía General de la Nación para imponer medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva intramural, lo remitió con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a la penitenciaría local de la ciudad de Tuluá (V).

TERCERO ; Con posterioridad a esta fecha el Juzgado 4 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Tuluá (V), el día 01 de febrero de 2016, sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, por la detención preventiva en el lugar de residencia.

CUARTO : Con posterioridad a este hecho la Fiscalía 9 Seccional de Tuluá (V), presentó ante el Juez 2 Penal del circuito de la ciudad de Tuluá (V), solicitud de **PRECLUSION** la cual se desarrolló el día 26 de febrero del año 2016, donde por medio de auto interlocutorio No. 025 se decretó la preclusión en favor de JHON WILMAR ROSERO GARZON, ordenándose la libertad **INMEDIATA** de mi patrocinado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Constitución Nacional prevé en el art. 90 que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. En este caso - la responsabilidad patrimonial del Estado, por "Error Judicial" permite ahora a mi poderdante, acudir ante la justicia contenciosa administrativa para que a través de la Acción de Reparación Directa, reclame del Estado, el pago de las sumas de dinero que se le deberán liquidar a su favor, como indemnización de perjuicios por el proceso penal que debió soportar injustamente, a causa de la falla de la administración de justicia en cabeza de varios de sus funcionarios.

La responsabilidad del ESTADO - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO Y/O CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, se manifiesta claramente toda vez que el señor JHON WILMAR ROSERO GARZON, permaneció privado de la libertad durante 01 mes y 13 días, como consecuencia de la detención que se le impuso en el proceso penal que se adelantó en su contra por el delito PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES Art. 365 de la ley 599 de 2000 C. Penal.

Como lo consagra el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437) en su Art. 140 que a la letra dice:

“...En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Expresión subrayada declarada Exequible por el cargo examinado, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2011

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública...”

En consecuencia, para mi poderdante se constituye la existencia de una obligación a su favor, de origen extracontractualmente exigible de pagar una cantidad líquida de dinero como se desprende y prueba con los documentos anexos.

El art. 9 No 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, apunta a que debe haber reparación en caso de encarcelación ilegal como lo es el caso. Igualmente el No 6. Del art. 14 del mismo pacto internacional, indica:

“... Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido...”

Uno de los fundamentos para aceptar la responsabilidad del estado por una deficiente administración de justicia es la *Falla del Servicio Público*, al igual que para las demás actuaciones del estado por las que debe responder; si se tiene en cuenta que sus obligaciones se basan fundamentalmente en la protección de la vida, honra y bienes de los asociados, para asegurar de esta forma el cumplimiento de los deberes sociales tanto del estado mismo como de los particulares, es apenas obvio que de mediar un incumplimiento para llevar estos

fines a la realidad se derive como consecuencia la responsabilidad del ente, entendiendo que estos fines constituyen una obligación latente y no un mero enunciado filosófico. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del tema ampliamente, y con fundamentos legales claros tanto de la anterior Constitución como de esta ha llegado a la conclusión anotada.¹

La Responsabilidad Patrimonial del Estado por falla en la administración de justicia, según lo previo el art. 65 de la Ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia que reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales. Modificada por la ley estatutaria 1285 de 2009, en la que se establece, sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado que:

“el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia...”

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades públicas/
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos estructurales/
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado

El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba

¹Ver Sentencias del Consejo de Estado: SECCION TERCERA SUBSECCION A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012) Radicación número: 73001-23-31-000-2000-01402-01(22701) Actor: SECUNDINO MORA PATIÑO Y OTROS Demandado: NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION.Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12076 y Sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp. 15980. Sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes números 13232 y 15646, Consejero Ponente doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez. Expediente 85001 23 31 000 1999 0351 (23381) de 2011, 2012-02-08. NUEVAMENTE LA FISCALÍA RESPONDE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, EN ESTE CASO DE UN CIUDADANO VINCULADO “IRREGULARMENTE” A INVESTIGACIÓN PENAL. Analizados los elementos de prueba aportados, la Sala encontró acreditado que la actuación de la Fiscalía constituyó el factor determinante para que la privación de la libertad del ciudadano resultara injusta, pues pese a las inconsistencias con la identidad del presunto autor del delito de estafa, la Fiscalía profirió orden de captura. Modifica. M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Documento Disponible al Público en Marzo de 2012. Temas: Principio Universal de Presunción de Inocencia. Prisión Arbitraria. Daño Antijurídico.

obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo.

Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño.

A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución de 1991: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado.

Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto.

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-La competencia radica en la Fiscalía General de la Nación

Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva, por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática.

DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia

Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia sobre cuándo se torna en injusta

Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado.

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Responsabilidad Patrimonial del Estado

Es menester recordar que en la Constitución Política, artículo 90, se ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.

De esta manera, el hecho de que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo todas las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos.

El Consejo de Estado en su jurisprudencia ha señalado los siguientes supuestos que deben cumplirse para que se configure la responsabilidad del Estado en aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Consecuente con ello, el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos también ha precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue más allá de lo que aquella razonablemente debía soportar a objeto de permitir que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida justicia.

Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación tiene facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento de detención preventiva, también lo es, que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Elementos que la configuran

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Carga a la cual no está obligada a soportar/**DAÑO ANTIJURÍDICO**-Generado por la Fiscalía General de la Nación

Así pues, la detención que sufrió JHON WILMAR ROSERO GARZON, deviene en injusta, pues efectivamente quedó probado que no tuvo participación en la comisión del punible por el que fue privado de su libertad, de conformidad con lo solicitado por la fiscalía en audiencia de PRECLUSION, fundamentándose jurídicamente en el artículo 232 numerales 5 y 6, a los cual accedió el Juez de Conocimiento por encontrar fundada la petición preclusiva, además su conducta no fue finalmente sancionada con una sentencia condenatoria, sino que efectivamente fue absuelto de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, el delito que se le endilgaba, se le impuso una carga que no estaba obligado a soportar, como fuera el tener que permanecer detenido por espacio de 01 mes y 13 días, con los consecuentes perjuicios que dicha circunstancia les acarreoó tanto a él como a los demás demandantes.

Finalmente, al estar determinada lo injusta que fue la privación de la libertad de que fue objeto el sindicado y encontrarse que existe nexo causal entre la actividad desplegada por la Fiscalía General de la Nación y el perjuicio causado a los demandantes, cual fue la detención por espacio de 01 mes y 13 días del sindicado; ha de concluirse que el ente demandado en su accionar causó un daño y que éste resultó antijurídico, de donde surge la obligación de indemnizar a la luz de la cláusula general de responsabilidad plasmada en el artículo 90 de la Constitución Política.

Como podemos apreciar, hay una obligación inexorable, de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado, teniendo en cuenta que se está violando los principios de la constitución política y la Convención de Derechos Humanos básicos y hay una responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos que le sean imputables, por tanto se concluye que se debe dar la aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad patrimonial del Estado procede cuando se cumplen los supuestos antes mencionados.

Igualmente en reciente decisión Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero Bogotá, veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015) Expediente: 33914 Radicación: 170012331000200001292 01 Actores: Álvaro Gómez Botero y otros Demandados: Nación-Fiscalía General de la Nación Naturaleza: Reparación directa se dijo lo siguiente:

“como ha sido el criterio reiterado de la Corporación, no es necesario demostrar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de error. Al damnificado le basta con probar que se le impuso una medida privativa de su libertad o restrictiva de sus derechos en el curso de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con

una decisión favorable a su inocencia y que se le causó un perjuicio con ocasión de la detención o la medida impuesta. Con esa sola circunstancia, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos³. (subrayado fuera de texto)

La razón de ser de esta regla se sustenta en la constatación de que la persona, por el hecho de vivir en comunidad, no está obligada a soportar una carga tan lesiva de sus derechos fundamentales y, en general, de su proyecto de vida, como la privación de la libertad, sin recibir a cambio algún tipo de compensación. Al respecto se ha señalado: La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo. Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas. La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando

³ 30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2013, exp. 29779, C.P. Danilo Rojas Betancourth

inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido telecológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general”.”

ESTIMACION DE LA CUANTÍA

De conformidad con lo establecido en la descripción de los hechos se funda la responsabilidad por parte de quienes están designados para la **ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**; así las cosas por razón de los perjuicios sirvan para pagar a mi mandante las siguientes sumas:

PERJUICIOS MORALES:

1. Siendo cierto que el señor JHON WILMAR ROSERO GARZON fue privado de manera injusta de su libertad, como quiera que le ente instructor no logró desvirtuar la presunción de inocencia y no logró probar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de mi patrocinado, quien efectivamente estuvo privado de su libertad por orden judicial de un Juez de Control de Garantías; así las cosas el señor JHON WILMAR ROSERO GARZON, no estaban en la obligación jurídica de sufrir *una privación injusta de la libertad* eventos provocados por la Administración de Justicia, en especial la Fiscalía General de la Nación quien solicitó al Juez de Control de Garantías la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva inicialmente en establecimiento carcelario y luego en su domicilio en detención domiciliaria medida decretada en contra de JHON WILMAR ROSERO GARZON. De esta manera, JHON WILMAR ROSERO GARZON, ha sufrido un detrimento moral por la arbitraria captura por lo tanto aquellos daños los cuantifico en TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
2. Igualmente sufrieron un perjuicio moral por la aprehensión injusta de su PADRE las menores ANA MARIA ROSERO TASCON, KAREN EDILIA ROSERO CAPOTE Y MARIA CAMILA ROSERO GALLEGO y quienes durante 1 mes y 13 días sufrieron la injusta privación de la libertad de su padre donde el Estado las privó de poder compartir este período de tiempo, además de las circunstancias familiares que genera el que un padre esté en la cárcel, situación que afecta desde todo punto de vista la esfera moral de los niños y que deja unas secuelas

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, exp. 24688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

bastante relevantes para su desarrollo y entendimiento de cómo funciona la justicia. Como sabemos los niños y niñas de personas presas son las víctimas invisibles del delito y del sistema penal. "No han hecho nada malo y sin embargo, sufren el estigma de la criminalidad", sus derechos de crianza se ven afectados en este caso de manera injusta por la respuesta del Estado en nombre de la Justicia, respuesta que a la postre se convirtió en una privación injusta de la libertad de su padre. Así las cosas con fundamento en ello solicito estos perjuicios morales para ANA MARIA ROSERO TASCON, KAREN EDILIA ROSERO CAPOTE Y MARIA CAMILA ROSERO GALLEGO en TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA CADA UNO DE ELLAS

3. Como se ha sostenido JHON WILMAR ROSERO GARZON es hijo los señores JESUS HERNAN ROSERO CALDAS, MARIA ESNEIDA GARZON BETANCOURTH, quienes son los PADRES de mi patrocinado y quienes durante 01 mes y 13 días sufrieron la privación injusta de la libertad de su hijo, quienes durante este tiempo lo visitaban los fines de semana en el penal, y luego esporádicamente en su residencia, pero su hijo no tenía libertad de locomoción, extrañaron a su hijo y fue doloroso el episodio de la privación injusta de la libertad de su hijo, así las cosas con fundamento en ello solicito estos perjuicios morales para JESUS HERNAN ROSERO CALDAS, MARIA ESNEIDA GARZON BETANCOURTH en TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA CADA UNO DE ELLOS.
4. MELBA LEONOR TASCON, quien es la compañera permanente de JHON WILMAR ROSERO GARZON, como lo ha dicho el Consejo de Estado, *en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad ; en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades, al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad.* (sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014) Así las cosas con fundamento en ello solicito estos perjuicios morales para MELBA LEONOR TASCON en TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

Ello con fundamento en el DOCUMENTO FINAL APROBADO MEDIANTE ACTA DEL 28 DE AGOSTO DE 2014 REFERENTES PARA LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS INMATERIALES Documento ordenado mediante Acta No. 23 del 25/sep/2013 con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales.

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad	Victima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidad	Parientes en el 2° de consanguinidad	Parientes en el 3° de consanguinidad	Parientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2°	Terceros damnificados
Término de privación injusta en meses		50% del Porcentaje de la Victima directa	35% del Porcentaje de la Victima directa	25% del Porcentaje de la Victima directa	15% del Porcentaje de la Victima directa
	SMLMV	SMLMV	SMLMV	SMLMV	SMLMV
Superior a 18 meses	100	50	35	25	15
Superior a 12 e inferior a 18	90	45	31,5	22,5	13,5
Superior a 9 e inferior a 12	80	40	28	20	12
Superior a 6 e inferior a 9	70	35	24,5	17,5	10,5
Superior a 3 e inferior a 6	50	25	17,5	12,5	7,5
Superior a 1 e inferior a 3	35	17,5	12,25	8,75	5,25
Igual e inferior a 1	15	7,5	5,25	3,75	2,25

Toda vez que el señor JHON WILMAR ROSERO GARZON, permaneció privado de la libertad durante 01 MES Y 13 DIAS.

B. PERJUICIOS PÉRDIDA DE LA VIDA EN RELACION:

1. JHON WILMAR ROSERO GARZON 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes

En lo que hace a la pretensión relativa a la indemnización de los perjuicios a la vida de relación, la Sección tercera de la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado tiene en cuenta el criterio jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado relativo al cambio de dicho rubro del daño inmaterial por el de alteración grave de las condiciones de existencia⁵. La indemnización de este tipo de daño –autónomo e independiente del daño moral– procede cuando las acciones u omisiones imputables a la Administración generan una protuberante perturbación de las condiciones de vida de los afectados. Sobre la materia, sostuvo el Consejo de Estado: “[...] la doctrina ha señalado, precisamente, que ‘para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de agosto 15 de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 2003-00385.

*del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismo tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece'. Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d'existence pueden entenderse como 'una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos' o 'las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral'. El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones. En otras palabras, para que sea jurídicamente relevante en materia de responsabilidad estatal, el impacto respecto de las condiciones de existencia previas ha de ser grave, drástico, evidentemente extraordinario." Si con lo anterior se ha querido reconocer la existencia de perjuicios extra patrimoniales, por fuera del tradicional perjuicio moral, con una noción mucha más amplia de lo que en su momento se denominó el perjuicio fisiológico o el daño a la vida de relación, con la nueva de alteración de las condiciones de la existencia, en el entendido que son los cambios bruscos y relevantes en las condiciones de vida de una persona. EN el presente asunto es evidente el trastocamiento de los roles cotidianos de JHON WILMAR ROSERO GARZON, quien fue privado de su libertad y quien ha manifestado sentir temor de salir de su casa como quiera que prácticamente quedó señalado dentro de su comunidad como persona portadora de armas y ex presidiario, la mayoría de personas enfrentadas al sistema de justicia penal proviene de un contexto de vulnerabilidad que se agrava luego de que son puestos en libertad, como consecuencia del estigma que genera una privación de la libertad, máxime cuando existe una **PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD**. Si esta situación es compleja incluso para quienes reciben una condena en libertad, resulta más perjudicial aún para quienes son privados de libertad. Dicho estigma puede constituir un obstáculo concreto para quienes busquen insertarse luego de obtener libertad. No es desacertado afirmar que la privación de la libertad genera un estigma para quien la sufre y que posteriormente sufre el rechazo de la sociedad porque aparentemente es un delincuente y una persona mal relacionada, una persona que ya no genera confianza para los demás ciudadanos.*

PERJUICIOS MATERIALES :

Tomando en cuenta que JHON WILMAR ROSERO GARZON, laboraba en oficios de albañilería pero no se pueden demostrar sus ingresos, el Consejo de Estad estableció que: *“No obstante los meidos probatorios arrimados al proceso no permiten tener por demostrado el monto del ingreso percibido por tal concepto, razón por la cual se acudirá a la presunción de que dicha actividad le generaba como ganancia 1 S.M.M.L.M.”*

El salario mínimo para el 2016 \$689.454

TOTAL. \$988.217.00.

Dineros que deben ser indexados y actualizados al momento del pago de la obligación por parte del Estado.

COMPETENCIA

Es usted competente señor Juez Administrativo de Buga (V), de conformidad con el factor territorial de la ciudad donde usted despacha, como quiera que los hechos sucedieron en la localidad de Tuluá (V), el cual pertenece a su Circuito Administrativo judicial. Así mismo la cuantía la cual se toma el valor de los perjuicios materiales, es decir \$988.217.00., por ello es usted competente para conocer del presente asunto.

PRETENSIONES

Que sea condenados dentro del trámite de ACCION DE REPARACION DIRECTA los demandados NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION, RAMA JUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTARCION JUDICIAL, por cumplirse lo preceptuado en la normatividad pertinente teniendo como fundamento la PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD que sufrió que sufrió JHON WILMAR ROSERO GARZON, dentro del proceso radicado Bajo el No. 76-834-31-04-002-2016-00024-00 en el cual estuvo privado injustamente de su libertad 01 mes y 13 días, asunto que terminó con preclusión en favor de mi patrocinado. En consecuencia de lo anterior se realicen las siguientes reconocimientos :

PRIMERA: Que se reconozcan y paguen perjuicios morales a JHON WILMAR ROSERO GARZON en la cuantía tasada es decir 35 S.M.M.L.V. y a sus menores hijas ANA MARIA ROSERO TASCON, KAREN EDILIA ROSERO CAPOTE Y MARIA CAMILA ROSERO GALLEG0 35 S.M.M.L.V. para cada una de ellas, al igual que a sus padres JESUS HERNAN ROSERO CALDAS, MARIA ESNEDA GARZON BETANCOURTH 35 S.M.M.L.V. para cada una

⁶ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo sección III Subsección A Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá D.C., 4.III.2011 radicación No. 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067) Actor Noelia del Socorro Londoño Giraldo y otros.

de ellos, así mismo se pague 35 S.M.M.L.V. a su compañera la señora MELBA LEONOR TASCON.

SEGUNDA: Que se reconozcan y paguen los perjuicios de vida de relación en favor de JHON WILMAR ROSERO GARZON en cuantía de 100 S.M.M.L.V.

TERCERA: Que se reconozca y pague en favor de JHON WILMAR ROSERO GARZON perjuicios materiales que ascienden a la suma de \$988.217.00. Dinero que debe ser indexado y actualizado al momento del pago efectivo de la obligación.

PRUEBAS

1. CUADERNO 1. Proceso tráfico. Fabricación o porte de armas de fuego accesorios partes o municiones. Acusado JHON WILMAR ROSERO GARZON. Rad. 76-834-31-04-002-2016-00024-00 de 82 folios y 03 CD 1 audiencia preliminar imposición de medida de aseguramiento detención preventiva en establecimiento carcelario, CD 2 sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural por detención domiciliaria CD 3 audiencia e preclusión. que justifica la exoneración del acusado.
2. Conciliación pre-judicial ante el procurador No. 60 Judicial I para asuntos administrativos de Santiago de Cali con la respectiva nota de ejecutoria.
3. Registro civil de nacimiento de JHON WILMAR ROSERO GARZON, para comprobar parentesco con sus padres JESUS HERNAN ROSERO CALDAS, MARIA ESNEDA GARZON BETANCOURTH, registro civil de nacimiento de ANA MARIA ROSERO TASCON, KAREN EDILIA ROSERO CAPOTE Y MARIA CAMILA ROSERO GALLEGU para probar parentesco con JHON WILMAR ROSERO GARZON.
4. Solicito a su señoría citar a las siguientes personas:
 - YAMILETH AGUDELO GARZON C.C No 66.987.050, quien podrá ser citada a en la calle 72 V No 28 E 28 de Cali, o a través del suscrito.
 - DIANA PATRICIA TASCON CAICEDO C.C No 66.661.104 quien podrá ser ubicada en la carrera 21 con calle 10 de Palmira , o a través del suscrito
 - MANFRED JHERLEYN CONTRERAS VARGAS C.C No 1.130.649.926 quien puede ser localizado en la calle 1 Bis oeste # 74 B -21 de Cali con teléfono 318 654 66 59 o a través del suscrito

Estas personas acudirán a su despacho para que con su testimonio se acredite que el señor JHON WILMAR ROSERO GARZON es compañero permanente de la señora MELBA LEONOR TASCON. además de manifestar al despacho lo que conocen de los sufrimientos y padecimientos de los demandantes frente a la injusta privación de la libertad que padeció el JHON WILMAR ROSERO GARZON.

ANEXOS

1. Poder legalmente conferido, con el cual se acredita la personería del suscrito con expresas facultades para conciliar y demandar.
2. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

JURAMENTO

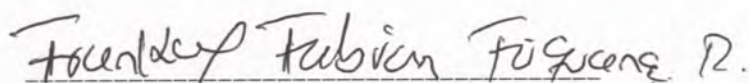
Manifiesto, bajo la gravedad del juramento, que mi representado ni el suscrito apoderado hemos presentado demanda alguna, salvo la conciliación pre judicial con base en los mismos hechos, ni demanda contencioso-administrativa.

NOTIFICACIONES

EL SUSCRITO Y EL CONVOCANTE EN: la Calle 46 No. 25D - 41 Tuluá
Valle del Cauca B/Nuevo Príncipe. Tel 2321106-- 3167422242: email:
frankly_fuquene@hotmail.com

- **DIRECCION EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL** o quien haga de sus veces ante lo Contencioso Administrativo. Calle 12 No. 7 - 65 Bogotá D.C. PBX: 565 8500. info@cendoj.ramajudicial.gov.co
- **FISCALIA GENERAL DE LA NACION**, Avenida el dorado carrera 45 No. 26-33 CAN Bogotá. jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Atentamente,



FRANKLY FABIÁN FUQUENE RIVERA
C.C No 14.797.749 Tuluá (V)
T.P. 226.169 del C. S de la J.